

Criminalidad y Orden Público

Un diálogo desde las políticas públicas

17 de octubre del 2024

La criminalidad en Colombia continúa siendo un desafío de gran relevancia, con un profundo impacto en el desarrollo social, económico y político del país. En el conversatorio organizado por el Centro de Pensamiento y la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas, de la Universidad EIA, en colaboración con el Centro de Valor Público y la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de la Universidad EAFIT; expertos académicos, autoridades locales y regionales debatieron de manera exhaustiva sobre los diversos factores que perpetúan la inseguridad y las políticas públicas necesarias para enfrentar estos desafíos. Las discusiones abarcaron desde el impacto del crimen organizado y el narcotráfico hasta el papel de la infraestructura en la mejora de las condiciones de vida, la lucha contra la pobreza y la prevención del reclutamiento juvenil en bandas criminales.

El evento fue inaugurado por el rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, quien subrayó la importancia de abordar el tema de la criminalidad y el orden público, no solo para Medellín, sino también para todo el país. Restrepo destacó el papel fundamental que desempeñan las instituciones académicas en el análisis y la comprensión de los fenómenos sociales más complejos, como el crimen y la inseguridad. En su intervención, enfatizó la necesidad de promover espacios de diálogo entre el mundo académico, las autoridades locales y la ciudadanía, afirmando que solo a través de un enfoque multidisciplinario es posible encontrar soluciones sostenibles a los problemas estructurales de la sociedad, como la violencia urbana, la desigualdad y la falta de oportunidades económicas.

Además, el rector resaltó que las investigaciones presentadas en el evento reflejan el compromiso de la academia con el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia, destacando que la colaboración entre el gobierno, la academia y el sector privado es esencial para enfrentar los retos de seguridad que enfrentan la ciudad y el país. Restrepo concluyó su discurso señalando que, en tiempos de incertidumbre como los que atraviesa Colombia, la educación y el conocimiento son pilares indispensables para construir una sociedad más justa, equitativa y segura.

A lo largo de su historia, Colombia ha enfrentado diversos ciclos de criminalidad, desde los grandes carteles de drogas de Medellín y Cali hasta los conflictos prolongados con grupos armados ilegales como las FARC y el ELN. Estos ciclos han moldeado el panorama de seguridad y las respuestas del Estado, obligando a las autoridades a desarrollar continuamente nuevas estrategias de contención y control. A medida que los actores delictivos evolucionan, también lo hacen sus métodos y zonas de influencia, lo que plantea nuevos retos para el control territorial y la implementación de políticas efectivas de seguridad.

Hablan los mandatarios regionales

Durante la primera parte del conversatorio, moderada por Ignacio Gaitán Villegas, presidente del Colombiano y miembro del Concejo Superior de la Universidad EIA, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, coincidieron en que el resurgimiento de grupos armados ilegales tras los acuerdos de paz ha reconfigurado el panorama de seguridad. Las disidencias de las FARC y otros actores ilegales han encontrado nuevas formas de operar, controlando

territorios estratégicos e incrementando su influencia. Esta fragmentación de la violencia pone de manifiesto que las soluciones rápidas no son sostenibles en el largo plazo, y que se requiere un enfoque integral y sostenido basado en la articulación institucional y el fortalecimiento del Estado en las áreas afectadas.

Federico Gutiérrez subrayó la necesidad de fortalecer la presencia del Estado y la fuerza pública en los territorios más afectados. Señaló que "la paz hay que garantizarla, y no podemos depender de la buena voluntad de las bandas criminales que operan en el territorio". Una de las principales conclusiones del evento fue la necesidad de abordar la criminalidad con políticas públicas integrales que combinen esfuerzos en seguridad, educación, infraestructura y desarrollo social. El gobernador y el alcalde coincidieron en que no se puede tratar el problema únicamente desde un punto de vista represivo; es crucial atacar las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la exclusión social, la falta de oportunidades y la desigualdad.

En Medellín, uno de los mayores logros ha sido la reducción de la tasa de homicidios, que ha alcanzado su nivel más bajo en 40 años. Las políticas que han permitido este avance incluyen programas sociales enfocados en la prevención, como la creación de infraestructura comunitaria y oportunidades laborales para jóvenes en riesgo. Un ejemplo destacado es el programa "Parceros", que busca alejar a los adolescentes vulnerables del reclutamiento por bandas criminales, ofreciendo formación académica y personal, así como oportunidades de desarrollo laboral. Gutiérrez subrayó que "el golpe más duro que le hemos dado a la criminalidad es alejar a los niños y jóvenes de las estructuras criminales".

Por su parte, Andrés Julián Rendón enfatizó que la esperanza en temas de seguridad en Colombia está en manos de los soldados y policías, aunque criticó que las políticas del gobierno central han limitado la capacidad de la fuerza pública para actuar de manera efectiva. Rendón expresó que, si el gobierno nacional les "desatara las manos", podrían avanzar más rápidamente en la lucha contra el crimen. Además, señaló que la falta de coordinación y apoyo financiero por parte del gobierno central ha sido un obstáculo significativo para la implementación de estrategias locales de seguridad, lo que ha dificultado el control territorial en algunas zonas afectadas por la criminalidad organizada.

Ambos mandatarios hicieron énfasis en la falta de apoyo financiero por parte del gobierno central para implementar estrategias de seguridad a nivel local. Federico Gutiérrez afirmó que "si no mandan los recursos nacionales, no hay operatividad. Las estructuras criminales están felices porque no hay operatividad". En línea con esto, Andrés Julián Rendón destacó que la minería ilegal y el narcotráfico son desafíos persistentes en su región, y que sin los recursos necesarios, estas actividades ilícitas continúan floreciendo. Ambos coincidieron en que los

esfuerzos por combatir el crimen no pueden depender exclusivamente de los fondos del gobierno central y que es necesario buscar soluciones integradas que involucren a actores locales, nacionales e internacionales.

Por último, el gobernador de Antioquia subrayó la importancia del control territorial como un factor crucial en la lucha contra la criminalidad. Rendón destacó que la presencia del Estado en las zonas más vulnerables y afectadas por el crimen es fundamental para reducir la influencia de los grupos criminales y garantizar la seguridad a largo plazo. Argumentó que el vacío de poder en ciertas áreas rurales y urbanas ha permitido que bandas criminales y grupos armados ilegales ejerzan una forma de "gobierno criminal", imponiendo su autoridad y control sobre los residentes. Para enfrentar este desafío, el gobernador señaló que es necesario fortalecer tanto la fuerza pública como la articulación institucional, garantizando una

mayor coordinación entre las agencias del gobierno. Rendón insistió en que la gestión del territorio no solo implica una intervención militar o policial, sino también el desarrollo de infraestructura y programas sociales que aseguren que el Estado no solo se haga presente de manera temporal, sino que mantenga su influencia de forma permanente en las áreas recuperadas del control criminal.

La perspectiva de los investigadores¹

Análisis del Programa de Sustitución de Cultivos (PNIS)

Hernando Zuleta, Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, presentó un análisis sobre la implementación y los resultados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), un componente clave del Acuerdo de Paz en Colombia firmado en 2016. Este programa, destinado a erradicar cultivos ilícitos mediante la provisión de asistencia alimentaria y proyectos productivos alternativos, ha tenido un impacto limitado en términos de efectividad y ejecución.

Zuleta identificó varias **limitaciones en la ejecución** de los proyectos productivos. Solo el 2.75% de los beneficiarios lograron acceder a cultivos de ciclo largo, como cacao o café, lo que refleja fallas logísticas y una falta de articulación entre las instituciones responsables. Además, aunque el componente de **asistencia alimentaria** fue implementado rápidamente, no logró reducir significativamente la pobreza en las áreas rurales afectadas por la producción de coca. Sin embargo, Zuleta destacó que las mujeres beneficiarias experimentaron una mejora en su situación de pobreza multidimensional, lo que sugiere que el programa podría haber sido más eficaz si hubiera incluido un enfoque de género más robusto.

El análisis también reveló impactos negativos no deseados, como el aumento de los cultivos de coca en algunas áreas, fenómeno que también se extendió a zonas vecinas no directamente intervenidas por el programa. Este **desplazamiento de cultivos ilícitos** surgió porque los agricultores en áreas cercanas expandieron sus plantaciones de coca en la expectativa de que,

¹ Las posiciones de los expertos son el resultado de sus investigaciones y análisis. En consecuencia, no comprometen necesariamente a las instituciones en las cuales desempeñan sus labores profesionales.

eventualmente, sus tierras también serían incluidas en el PNIS y, por lo tanto, recibirían compensaciones. Este efecto colateral no solo socavó los logros esperados del programa en las zonas intervenidas, sino que también exigió mayores recursos del Estado para controlar la expansión de los cultivos en áreas no previstas.

Zuleta concluyó que cualquier programa futuro debe enfocarse en la **sostenibilidad** de los proyectos productivos y en la **reducción de la pobreza estructural**, más allá de la simple erradicación de cultivos ilícitos.

Reclutamiento juvenil en bandas criminales

El fenómeno del reclutamiento juvenil en bandas criminales en Medellín es un problema profundamente arraigado y complejo, que afecta a miles de adolescentes cada año. La investigación presentada por Santiago Tobón, profesor e investigador de la Universidad EAFIT arroja luz sobre los factores que impulsan este proceso y las posibles estrategias para reducir su incidencia. El análisis reveló que las decisiones de los jóvenes de unirse a estas bandas están influenciadas tanto por

factores económicos como sociales, así como por las limitadas oportunidades educativas y laborales a las que tienen acceso.

Uno de los aspectos clave del estudio fue la identificación de cómo los adolescentes perciben sus opciones ocupacionales. Los jóvenes que crecen en áreas vulnerables a menudo ven la participación en bandas criminales como una alternativa económica viable frente a los empleos formales. Tobón mostró que los jóvenes, en su mayoría entre 14 y 16 años, tienden a sobreestimar significativamente los ingresos que podrían obtener en una banda criminal y subestiman los ingresos de empleos formales. Esta distorsión en sus expectativas se basa en gran parte en la falta de información adecuada sobre el mercado laboral y las limitaciones estructurales que enfrentan para acceder a empleos legítimos.

El reclutamiento juvenil en Medellín ocurre principalmente en barrios de alta vulnerabilidad, donde la pobreza, el desempleo y la deserción escolar son factores predominantes. Las encuestas realizadas por Tobón en más de 10,000 estudiantes en zonas marginalizadas de la ciudad revelaron que muchos jóvenes ven la participación en las bandas como una forma de lograr estatus social y seguridad económica en un entorno donde las oportunidades legales son limitadas. Para estos adolescentes, ingresar a una banda criminal no es percibido como una decisión temporal, sino como una carrera ocupacional, lo que resalta la gravedad del problema.

Otro factor importante que facilita el reclutamiento juvenil es la presión social y familiar. En muchos casos, los jóvenes provienen de entornos donde la criminalidad está normalizada y, a menudo, tienen familiares o amigos cercanos involucrados en actividades ilícitas. El estudio reveló que un 35% de los adolescentes entrevistados tenían algún familiar o conocido en una banda criminal, lo que refuerza la idea de que seguir ese camino es una opción aceptada e incluso esperada dentro de sus comunidades.

La falta de estructuras familiares sólidas y la ausencia de figuras de autoridad positivas agravan la situación. Los jóvenes que carecen de modelos a seguir en sus familias tienden a buscar sentido de pertenencia en las bandas, donde encuentran identidad y protección. Las bandas criminales no solo ofrecen ingresos, sino también un sentido de comunidad y pertenencia que muchos jóvenes no encuentran en otros aspectos de sus vidas.

Aunque la participación de mujeres en bandas criminales en Medellín es baja, Tobón señaló algunas dinámicas de género relevantes. Las mujeres, aunque representan una minoría en los combos (bandas), participan de manera diferente a los hombres. En Medellín, la mayoría de las mujeres involucradas en actividades criminales lo hacen de manera periférica, como en trabajos relacionados con el cuidado o el apoyo a los miembros masculinos de la banda, y a veces a través de relaciones sentimentales con líderes criminales.

Otro aspecto crítico es el trabajo sexual, que se presenta como una de las pocas alternativas ocupacionales para muchas mujeres jóvenes en zonas vulnerables. Tobón mencionó que el trabajo sexual en Medellín a menudo se toma como una decisión de necesidad, en ausencia de otras oportunidades económicas. Esto plantea un desafío adicional en términos de políticas públicas, ya que es necesario ofrecer a las mujeres jóvenes alternativas ocupacionales seguras y dignas para evitar que caigan en redes criminales o de explotación sexual.

Otro de los hallazgos más significativos de la investigación de Tobón fue el impacto positivo que pueden tener las intervenciones informativas sobre las decisiones ocupacionales de los jóvenes. En un experimento realizado en colegios vulnerables, Tobón y su equipo proporcionaron a los estudiantes información detallada sobre las oportunidades laborales reales y los ingresos promedio de los empleos formales, en contraste con los ingresos ilícitos obtenidos en bandas criminales. El resultado fue una reducción significativa en el interés de los jóvenes en unirse a estos grupos, lo que subraya la importancia de ajustar las expectativas mediante información adecuada.

Programas como "Parceros", diseñados para ofrecer a los jóvenes en riesgo alternativas educativas y laborales, también fueron destacados como una estrategia efectiva para reducir el reclutamiento juvenil. "Parceros" se centra en brindar formación académica y capacitación laboral a adolescentes que están en peligro de ser reclutados por bandas, dándoles las herramientas para elegir un camino diferente y mejorar sus expectativas de futuro. No obstante, Tobón sugirió que este tipo de programas deben ser ampliados y recibir mayor financiamiento a largo plazo para ser sostenibles y llegar a un número mayor de jóvenes.

El estudio de Tobón concluye que, para reducir el reclutamiento juvenil en bandas criminales, las políticas públicas deben enfocarse en prevenir el abandono escolar en etapas críticas, como el grado noveno, donde la deserción aumenta considerablemente. Las intervenciones tempranas que ofrezcan oportunidades educativas de calidad, así como programas que

permitan a los jóvenes adquirir habilidades laborales prácticas, son esenciales para disminuir la atracción hacia las bandas.

Tobón también propuso la creación de iniciativas integradas que involucren a las familias, escuelas y comunidades, asegurando que los jóvenes reciban el apoyo necesario para desarrollarse en entornos saludables. Esto incluye no solo la educación formal, sino también la educación en valores, la prevención del crimen y la creación de entornos seguros donde los adolescentes puedan prosperar sin recurrir al crimen.

Impacto del Metro y la infraestructura en la Criminalidad

La investigación presentada por Carlos Medina, gerente del Banco de la República, Sucursal Medellín, abordó un tema crucial para el desarrollo urbano y la seguridad en Medellín: el impacto de las infraestructuras de transporte como el Metro de Medellín y las líneas de cables aéreos en la criminalidad y la calidad de vida de los habitantes. Este estudio se centró en cómo las mejoras en la movilidad urbana y el acceso a las oportunidades económicas pueden influir en la reducción de las actividades delictivas, el bienestar de la población y el desarrollo económico de la ciudad.

Medina destacó que la construcción del Metro de Medellín, que ha sido un pilar fundamental en la transformación de la ciudad, tuvo un impacto positivo significativo en la reducción de la exclusión social y la mejora de la movilidad de los sectores más vulnerables. Las líneas de cable aéreo, que conectan barrios periféricos como el Popular 1 y 2 y la Comuna 13 con el centro de la ciudad, han reducido drásticamente los tiempos de desplazamiento, mejorando la accesibilidad a oportunidades laborales y educativas.

Antes de la construcción de estas infraestructuras, los residentes de estos barrios enfrentaban tiempos de viaje prolongados y costosos para llegar a áreas más prósperas de Medellín, como El Poblado y Laureles, donde se concentran las oportunidades laborales más atractivas. Según Medina, las mejoras en el

transporte permitieron ahorros de tiempo que oscilaban entre 30 y 70 minutos, dependiendo de la ubicación de las estaciones del Metro y las líneas de cable. Este ahorro de tiempo no solo permitió a los residentes conectarse con oportunidades económicas en otras partes de la ciudad, sino que también mejoró su calidad de vida al reducir las barreras de movilidad que antes los mantenían aislados.

En términos económicos, el estudio estimó que la inversión en infraestructura de transporte generó un aumento neto en el bienestar de la ciudad, equivalente a unos 2 mil millones de dólares. Este beneficio no se limitó solo a los ahorros en tiempo de transporte, sino también al aumento en la formalización del empleo, el acceso a servicios públicos y el crecimiento en la productividad económica de la ciudad. Medina destacó que, aunque el costo inicial del proyecto fue elevado, los beneficios a largo plazo justifican ampliamente la inversión en transporte público de calidad.

El impacto del Metro y los cables

aéreos en la reducción de la criminalidad fue otro de los aspectos clave analizados en la investigación de Medina. En las zonas donde se construyeron estaciones de Metro y líneas de cable, como el Popular y la Comuna 13, se observó una disminución significativa en las tasas de homicidios y otros delitos violentos. Estas áreas, que anteriormente estaban entre las más peligrosas de la ciudad, se beneficiaron de una mayor presencia del Estado y una mejora en la movilidad, lo que permitió una mayor integración social y una mayor oportunidad económica para los residentes.

La reducción de la criminalidad en estas zonas está relacionada con el hecho de que el transporte masivo actúa como un catalizador de oportunidades. Al facilitar el acceso de los residentes a mejores empleos y educación, se reduce la vulnerabilidad de los jóvenes al reclutamiento por parte de bandas criminales. Esto es especialmente relevante en barrios donde la pobreza, la deserción escolar y la falta de oportunidades laborales habían sido factores clave en la persistencia del crimen organizado.

Además, el aumento en la visibilidad pública y la mayor movilidad de personas en estas áreas, debido al flujo constante de pasajeros en el sistema de transporte, también dificultó las actividades delictivas. La mayor afluencia de personas y la presencia de estaciones y servicios de transporte actuaron como un factor disuasivo para las bandas criminales, que antes operaban con mayor facilidad en áreas más aisladas y menos controladas.

A pesar de los efectos positivos en las zonas directamente beneficiadas por la infraestructura, la investigación de Medina también señaló un efecto colateral negativo: el desplazamiento de la criminalidad hacia áreas menos vigiladas y no conectadas al sistema de transporte. Este fenómeno, conocido como el "efecto globo", ocurre cuando la criminalidad disminuye en una zona gracias a la intervención del Estado, pero las actividades delictivas se desplazan a otras áreas donde la presencia del Estado es menor o inexistente.

En el caso de Medellín, Medina observó que, aunque el Popular 1 y 2 y la Comuna 13 experimentaron una reducción significativa en el crimen, este se trasladó a barrios periféricos no conectados al sistema de transporte, lo que plantea un nuevo desafío para las autoridades. Estos barrios más alejados, que no se beneficiaron de la inversión en infraestructura de transporte, se convirtieron en focos de actividad criminal debido a la falta de oportunidades económicas y el menor control estatal.

Medina enfatizó que este fenómeno de desplazamiento requiere un enfoque más integral en las políticas de seguridad y desarrollo urbano. Las inversiones en infraestructura deben ir acompañadas de estrategias

de seguridad coordinadas que aseguren que la criminalidad no simplemente se traslade a otros barrios, sino que sea efectivamente reducida en toda la ciudad. El fortalecimiento institucional y la presencia continua del Estado en las áreas vulnerables son fundamentales para mitigar este problema.

Además de la reducción de la criminalidad, Medina subrayó que la infraestructura de transporte ha tenido un impacto profundo en la formalización del empleo y el crecimiento económico de las zonas beneficiadas. Al mejorar la conectividad y reducir los costos de transporte, se han abierto nuevas oportunidades de empleo para los residentes de las zonas más desfavorecidas, lo que ha ayudado a reducir los índices de pobreza y a mejorar la cohesión social.

El Metro y las líneas de cable también han actuado como catalizadores de inversión privada en las áreas circundantes. Muchos empresarios han visto el potencial de estas áreas y han comenzado a invertir en el desarrollo de infraestructura comercial y vivienda en los barrios conectados al sistema de transporte. Esto ha generado un efecto multiplicador, donde la inversión pública en transporte masivo ha atraído capital privado, contribuyendo al desarrollo económico de estas áreas previamente marginadas.

El panel de los expertos

La última sección del evento fue un panel de expertos moderado por Catalina Gómez Toro, quien comenzó destacando el papel clave de las instituciones en la lucha contra la criminalidad y mencionando cómo la investigación y la evidencia empírica pueden complementar las políticas públicas. El panel incluyó a Manuel Villa Mejía (Secretario de Seguridad de Medellín), Hernando Zuleta (Decano de Economía de la Universidad de los Andes), Carlos Medina (Gerente del Banco de la República, Sucursal Medellín) y Santiago Tobón (Profesor e Investigador en Economía de la Universidad EAFIT).

Manuel Villa Mejía enfatizó que la criminalidad en Medellín es un fenómeno organizado y que la institucionalidad debe estar mejor organizada y articulada para enfrentarlo. Explicó que el crimen debe ser gestionado y reducido a través de políticas públicas que sean sostenibles en el largo plazo. Villa subrayó que el principal desafío es lograr una articulación efectiva entre las diferentes entidades del Estado, como la policía y la justicia, que a menudo actúan de manera descoordinada. Un ejemplo de esto es cómo los cambios en los líderes institucionales (como fiscales o generales) generan discontinuidad en las estrategias de seguridad.

Además, Villa mencionó que la eficacia policial a menudo se ve limitada por una falta de coordinación con el sistema judicial, lo que genera frustración en la policía cuando capturan criminales y estos son liberados rápidamente. Propuso una mayor capacitación conjunta entre jueces, fiscales y policías para unificar criterios sobre procedimientos, un esfuerzo que ya se ha iniciado en Medellín.

Santiago Tobón abordó dos temas fundamentales: las diferencias de género en la participación en bandas criminales y el golpe a las finanzas de estas organizaciones. Sobre el primer tema, Tobón explicó que la membresía de mujeres en bandas criminales en Medellín es baja, en parte debido a una masculinidad tóxica que domina el crimen organizado en la ciudad. Sin embargo, en otras ciudades como Cali, la participación de mujeres es más alta, representando alrededor de un tercio de los miembros en las pandillas. En Medellín, las mujeres suelen estar vinculadas a los combos a través de relaciones sentimentales o en roles más periféricos, como el trabajo sexual.

Tobón también destacó que el trabajo sexual en Medellín tiene varias connotaciones: algunas mujeres lo eligen como una opción ocupacional con base en una evaluación económica, mientras que otras lo hacen por necesidad debido a la falta de oportunidades laborales. Sugirió que los programas de intervención deben ofrecer alternativas ocupacionales y educativas para las mujeres jóvenes en riesgo.

En cuanto al golpe a las finanzas de las bandas criminales, Tobón estuvo de acuerdo con la importancia de atacar las fuentes de ingreso de estas organizaciones. Mencionó la necesidad de una mejor coordinación entre las agencias del gobierno para combatir el lavado de activos y criticó la falta de presencia de instituciones especializadas como la UIAF en Medellín, lo que limita la capacidad para hacer frente a este fenómeno.

Hernando Zuleta respondió a una pregunta sobre la aspersión aérea como método para erradicar cultivos de coca. Recordó que, antes de su suspensión en 2015, la aspersión aérea era costosa y poco efectiva. Los estudios mostraban que la aspersión no reducía significativamente los cultivos ilícitos, sino que simplemente los desplazaba a otras áreas, además de causar problemas de salud en las comunidades afectadas.

Zuleta también mencionó que, aunque la destrucción de laboratorios y “cristalizaderos” ha sido una medida efectiva para interrumpir la cadena de producción de cocaína, estas intervenciones suelen provocar brotes de violencia debido a la competencia entre los grupos criminales por el control de los recursos. Sugirió que es necesario repensar las estrategias antidrogas para evitar que las intervenciones generen más violencia en las zonas rurales.

Carlos Medina volvió sobre el impacto del Metro de Medellín y otras infraestructuras de transporte en la criminalidad y la economía de la ciudad. Mencionó que, aunque la infraestructura de transporte masivo ha reducido significativamente el crimen en las zonas directamente beneficiadas por el sistema, el fenómeno del desplazamiento del crimen sigue siendo un problema. El crimen se ha trasladado a áreas que no están conectadas al sistema de transporte, lo que sugiere que las intervenciones deben ser más integrales.

A pesar del desplazamiento, Medina concluyó que los beneficios económicos y sociales del Metro superan con creces los costos. Enfatizó que las intervenciones en infraestructura deben continuar, pero deben ir acompañadas de estrategias de seguridad que mitiguen el desplazamiento de actividades criminales.

El panel finalizó con una reflexión sobre la necesidad de implementar políticas estructurales que aborden los problemas de criminalidad desde una perspectiva económica y social. Los expertos coincidieron en que el crimen en Medellín es principalmente un fenómeno económico, y que las intervenciones deben dirigirse a reducir las rentas criminales y aumentar las oportunidades legales para los jóvenes. Además, se destacó la importancia de fortalecer la institucionalidad y mejorar la articulación entre las agencias del gobierno para garantizar una respuesta más efectiva y coordinada al crimen organizado.

Conclusión

La criminalidad en Colombia sigue siendo un desafío multifacético que requiere un enfoque integral y sostenido. Las discusiones del conversatorio resaltaron que las soluciones basadas únicamente en la

represión son insuficientes; es necesario articular políticas de seguridad con iniciativas sociales, educativas y económicas que aborden las causas estructurales de la violencia, como la pobreza y la falta de oportunidades.

La coordinación efectiva entre el gobierno central y las autoridades locales, junto con el fortalecimiento de la fuerza pública, es esencial para lograr un control territorial adecuado. Además, las investigaciones presentadas subrayaron la importancia de programas sociales inclusivos y el impacto positivo de la infraestructura en la reducción de la criminalidad. En definitiva, la lucha contra la criminalidad en Colombia debe ser estructural, multifacética y enfocada en soluciones de largo plazo que integren desarrollo social y económico con seguridad pública.